



La Alianza Anticomunista Argentina. Análisis de su trayectoria y articulaciones represivas

*The Argentinian Anti-Communist Alliance:
Analysis of its repressive trajectory and
articulations*

Carlos Fernando López de la Torre*

Palabras clave:

Triple A
Represión
paraestatal
Escuadrones de
la muerte
Complejo
contrainsurgente
Tercer Peronismo

Resumen

Desde la década de 1980 existe en la sociedad argentina un sentido común sobre la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que tiende a mirarla como la organización que coordinó la represión ilegal durante el tercer peronismo (1973-1983) y cuyo accionar dependió exclusivamente de los designios del ministro José López Rega. El presente artículo busca problematizar estas interpretaciones a partir de dos ejes temáticos: la trayectoria histórica de la Triple A y las articulaciones establecidas con otros agentes represivos de la época. Dichas temáticas permitirán observar la complejidad de este escuadrón de la muerte desde el carácter procesual de su evolución organizativa y represiva como a partir de los intereses estratégicos que guiaron sus relaciones al interior del entramado represivo.

* Doctorando en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mis principales líneas de investigación son el estudio de la represión contrainsurgente en América Latina durante la Guerra Fría, las derechas latinoamericanas y el estudio de las recepciones del conflicto árabe-israelí y la cuestión palestina en América Latina. Contacto: carloslopezdelatorre@filos.unam.mx

El trabajo muestra cómo la Triple A evolucionó en su estructura y prácticas violentas acorde a los cambios en el contexto político y el proceso represivo contra-insurgente. Además, se formulan tres modelos interpretativos del tipo de articulación sostenida por el escuadrón: compenetración, complementariedad y divergencia.

Keywords:

Triple A
Parastatal repression
Death squads
Counterinsurgency
Third Peronismo

Abstract

Since the 1980s, there has been a common sense in Argentine society about the Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) that tends to regard it as the organization that coordinated the illegal repression during the third Peronism (1973-1983) and whose actions depended exclusively on the designs of the minister José López Rega. This article seeks to problematize these interpretations from two thematic axis: the historical trajectory of Triple A, and the articulations established with other repressive agents of the time. These themes will allow us to observe the complexity of this death squad from the procedural nature of its organizational and repressive evolution, as well as from the strategic interests that guided its relations within the repressive framework.

The work shows how Triple A evolved in its structure and violent practices according to the changes in the political context and the counterinsurgent repressive process. In addition, three interpretive models of the type of sustained articulation were formulated by the squad: rapport, complementarity, and divergence.

La Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) fue el escuadrón de la muerte paraestatal más importante del llamado tercer peronismo (1973-1976). Desde la década de 1980 se han producido investigaciones periodísticas y académicas que han buscado, ya sea de forma central o tangencial, analizar e interpretar la represión de la Triple A en el marco de la violencia política que experimentó la nación argentina en los años previos a la última dictadura militar. Un breve repaso a esta producción bibliográfica permitirá ubicar el interés y objetivos del presente texto.

Con el retorno a la democracia en 1983, la sociedad asumió el esfuerzo de interpretar la violencia y represión política vividas en los años setenta. Sobre la Triple A, el consenso interpretativo tuvo correspondencia con la teoría de los “dos demonios” del informe *Nunca Más* de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), apareciendo junto a las guerrillas como las culpables de la espiral de violencia correspondiente al periodo del gobierno peronista.¹ Bajo este marco, la sociedad construyó un sentido común sobre la Triple A, interpretándola como la organización directriz de la represión ilegal previa a la última dictadura militar y cuya responsabilidad en su actuar competió a José López Rega en calidad de ser su fundador.²

Varios trabajos periodísticos y testimoniales acompañaron este sentido común, entre ellos los de Ignacio González Janzen, Eduardo Blaustein y el singular caso de Horacio Paino, hasta ahora la única persona que se definió como miembro “arrepentido” del escuadrón y que publicó su testimo-

1 La CONADEP inicialmente contempló no limitar la investigación de las desapariciones al periodo de la última dictadura y algunos de sus integrantes aseguraron que se trataría el caso de la Triple A. Sin embargo, esta disposición cambió por razones políticas, puesto que Raúl Alfonsín no quiso investigar la responsabilidad de la conducción peronista en las violaciones a los derechos humanos, medida que afectaría la relación de su gobierno con el principal partido de oposición. Sobre las razones que influyeron en la decisión de excluir el periodo peronista del trabajo de la CONADEP véase Crenzel, 2008, pp. 97-98.

2 La captura de López Rega en 1986 y su posterior procesamiento judicial le dieron a este personaje una centralidad inusitada al punto de convertirlo en un “chivo expiatorio” sobre el cual cargar culpabilidades por la represión, aunque también su protagonismo obedeció al intento de encubrir la responsabilidad de Juan D. Perón en la deriva represiva de aquellos años.

nio con cierta tendencia a justificar la “guerra” contra la “subversión”.³ Esta bibliografía tiene el mérito de ser el primer esfuerzo por reunir información y brindar nombres de los posibles involucrados en la Triple A, aunque no logran articular la denuncia de este actor en particular a una condena general de la política represiva del Estado.⁴ La ausencia de una mirada más global y articulada del proceso represivo causó que el análisis de la Triple A estuviera regulado por la sobredimensión y el reduccionismo de sus facultades represivas. Sobredimensión en cuanto aparece como la coordinadora de la “federación de grupos de derecha” que asesinó a miles de personas. Reduccionismo en cuanto a su agenda política, limitada a los designios de López Rega.

En los años siguientes, investigaciones periodísticas y académicas cuestionaron la omisión de la diversidad de agentes represivos de la época, si bien mantuvieron a la Triple A en el centro de la represión de la derecha peronista y a López Rega en un protagonismo que desplazó al escuadrón a un plano secundario de la discusión sobre la violencia paraestatal. José Pablo Feinmann, Marcelo Larraquy y Gabriel Glasman son algunos de los autores inscritos en esta suerte de renovación del sentido común de la Triple A, que aún perdura en buena parte de la sociedad argentina.⁵

En la última década se han desarrollado una serie de investigaciones que, partiendo de nuevas interrogantes y metodologías, han enriquecido el estudio de la represión durante el gobierno peronista. Esta producción bibliográfica se ha interesado por diversos aspectos que ilustran la complejidad del periodo. Por ejemplo, Marina Franco atiende las prácticas represivas estatales que configuraron un estado de excepcionalidad jurídica proclive a la eliminación del “enemigo interno”. Mario Ranalletti y Esteban Pontoriero han reparado en los cambios ideológico-normativos de las Fuerzas Armadas como condición de posibilidad de la doctrina antisubversiva que justificó la intervención militar en seguridad interna, o bien, el exterminio clandestino de las disidencias a partir de 1975. Una corriente importante está orientada al análisis de la violencia represiva y sus perpetradores estatales, paraestatales y civiles, manejando un enfoque de escalas útil para pensar las modalidades que el proceso represivo nacional adoptó en espacios locales. Juan

3 González Janzen, 1986; Blaustein, 1984; Paino, 1984.

4 Merele, 2017, p. 35.

5 Feinmann, 1987; Larraquy, 2007; Glasman, 2010.

Besoky, Hernán Merele, Belén Zapata, Santiago Garaño, Pablo Scatizza y Laura Rodríguez Agüero son algunos de los especialistas inscritos en esta corriente.⁶

Este texto se considera tributario de las investigaciones recientes. Sus autores han demostrado que la represión en el periodo de interés difícilmente puede limitarse al accionar de la Triple A; por el contrario, invitan a repensar cuál fue el papel que dicho actor tuvo en un proceso represivo caracterizado por la imbricación de diversas prácticas y sujetos de carácter legal e ilegal. En otro orden de palabras, se trata de inscribir a la Triple A dentro del complejo contrainsurgente del peronismo gobernante, entendiendo este fenómeno como la ordenación del poder contra expresiones de insurrección donde se articulan múltiples estructuras y estrategias de actuación, que exceden el ámbito de lo legal y lo propiamente militar, con el doble objetivo de preservar la identidad del aparato estatal en relación con la naturaleza del régimen y asegurar su continuidad hegemónica.⁷

Considero que la idea del complejo contrainsurgente permite desprendernos del sentido común de la Triple A e introducirla en la trama represiva del tercer peronismo reconociendo dos premisas: 1) que sus condiciones de desarrollo estuvieron dadas por la evolución del contexto político; 2) que su participación en el complejo coincidió con la de un heterogéneo conjunto de actores –fuerzas estatales, cuadros civiles de la derecha peronista y otras fuerzas paraestatales– con agendas propias y hasta contrapuestas.

El presente artículo busca problematizar en estas cuestiones partiendo de dos ejes de aproximación: la trayectoria histórica de la Triple A y la articulación con otros agentes del complejo contrainsurgente. Las temáticas elegidas permiten analizar la complejidad del escuadrón desde el carácter procesual de su estructura organizativa como a partir de los intereses y apuestas estratégicas que guiaron el acercamiento con otras fuerzas represivas legales e ilegales.

El primer apartado del trabajo atiende la trayectoria de la Triple A, procurando situarla en el marco histórico que posibilitó su emergencia y los cambios que atravesó hasta su disolución. Esta propuesta apunta a obser-

6 Franco, 2012a; Ranalletti y Pontoriero, 2010; Pontoriero, 2016; Besoky, 2020; Merele, 2017; Garaño, 2012; Zapata, 2014; Rodríguez Agüero, 2013; Scatizza, 2016.

7 Franco Restrepo, 2002, p. 59.

var cómo el desarrollo de su estructura y accionar estuvo interrelacionado con la evolución del peronismo gobernante y del complejo contrainsurgente. Los especialistas han señalado ya la pertinencia de la contextualización. Scatizza plantea que la Triple A es uno de los posibles puntos de partida para pensar el terror de Estado de los años setenta porque, entre otras cuestiones, fue un espacio de formación y aprendizaje para futuros represores de la última dictadura;⁸ mientras Merele ha propuesto que, entre 1973 y 1974, el proceso represivo experimentó un agravamiento progresivo al transitar de una primera etapa, cuyo objetivo central era la “depuración ideológica” del peronismo, a otra donde el gobierno recurrió a los grupos paraestatales para reprimir a opositores dentro como fuera del peronismo, ubicando la relevancia del escuadrón en dicha transición.⁹ En diálogo con esta interpretación, periodizo la trayectoria de la Triple A en tres momentos centrales: formación (mediados de 1973 a mediados de 1974), apoteosis (julio de 1974 a julio de 1975) y desintegración (segunda mitad de 1975 a principios de 1976).

El segundo apartado aborda la articulación de la Triple A con otros actores represivos. La problematización de las articulaciones permite refutar la idea de la Triple A como el complejo contrainsurgente, aquella entidad que coordinó la represión ilegal del periodo. Claro que esta afirmación no representa novedad alguna. Estudios de caso como los de Merele, Besoky y Zapata han ilustrado la coexistencia de agrupaciones de derecha peronista, grupos de choque sindicales y la Triple A en un mismo espacio con el fin de aniquilar los fenómenos de contestación social. Mi interés va en formular un esquema de análisis orientado a dimensionar la complejidad de las articulaciones de la Triple A, cuya revisión demuestra que las alianzas establecidas no significaron la subordinación de las contrapartes e, incluso, llegaron a producir desavenencias que concluyeron en posteriores conflictos al interior del complejo contrainsurgente.

Tal esquema está basado en tres modelos de interpretación que rinden cuenta del tipo de articulaciones sostenidas por la Triple A: 1) *compenetración*, que alude a aquellas estables y casi orgánicas; 2) *complementariedad*, donde las partes se articularon al coincidir sus objetivos particulares, si bien mantuvieron agendas propias y procedimientos autónomos; 3) *divergencia*, que re-

8 Scatizza, 2016, pp. 43-48.

9 Merele, 2016, pp. 121-123.

fiere a intentos de articulación fallidos que terminaron en conflictos. Con este modelo podemos establecer que la Triple A fue un engranaje más de la maquinaria represiva cuya marcha distó de ser armónica pese a los proyectos comunes. Cada modelo es ilustrado con casos empíricos, concretamente y siguiendo el orden del listado, con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la agrupación de derecha peronista Comando de Organización y el Ejército, esta última causante de una crisis que aceleró la caída de López Rega y precipitó la desintegración del escuadrón.

La trayectoria histórica de la Triple A

La represión durante el tercer peronismo se insertó en la trama general del proceso represivo de la segunda mitad del siglo XX argentino, estructurado en torno al estado de excepción permanente y la contrainsurgencia como paradigma resolutivo del conflicto social. Tales estructuras se desarrollaron en un contexto singular, puesto que el peronismo gobernante inició con altos índices de expectativa social y con el compromiso de solucionar el problema de la violencia política. La dificultad para resolver las demandas de la sociedad movilizadas dentro de los canales establecidos por el modelo populista de nación ideado por Perón, basado en la conciliación con las fuerzas políticas tradicionales y el pacto entre clases sociales, derivó en la anulación del estado de derecho, la agudización de la violencia y la emergencia de una represión inusitada hasta ese momento.¹⁰

Parte de la complejidad como especificidad del proceso represivo entre 1973 y 1976 radicó en la imbricación entre las formas legalizadas y clandestinas, estatales y paraestatales de represión.¹¹ La acción punitiva y violenta fue perpetrada por un complejo contrainsurgente que articuló a las fuerzas de seguridad estatales, actores paraestatales y agrupaciones civiles –entre las que destacaron los cuadros anticomunistas de la derecha peronista– con el objetivo de reprimir la “subversión”, alteridad negativa cuya concepción clara y ambigua pasó a referir cualquier tipo de conflictividad, descontento y malestar presente en la sociedad.¹² Entre los prin-

10 Cavarozzi, 2002, pp. 44-51; Svampa, 2007, pp. 383-384.

11 Franco, 2016, p. 39.

12 Ranalletti y Pontoriero, 2010, p. 5

cipales actores partícipes de la “guerra” contrasubversiva se encuentran los escuadrones de la muerte paraestatales.

Los mencionados escuadrones de la muerte son producto de la paraestatalidad, es decir, una política de Estado que consiste en descentralizar la represión y confiar sus intereses a actores ilegales que son respaldados por las propias instituciones estatales, si bien poseen cierto margen de autonomía frente a ellas, mientras cumplen funciones de seguridad interna con técnicas criminales orientadas a defender el orden hegemónico.¹³ En el marco de la Guerra Fría en América Latina y Argentina, los escuadrones fueron fuerzas clandestinas que se constituyeron mayoritariamente con policías y militares adoctrinados en la contrainsurgencia y que se caracterizaron por utilizar métodos coercitivos ilegales que destacaron por una crueldad expuesta al público con la intención de que la visibilidad del terror disciplinara a opositores y a la sociedad en general. La vinculación orgánica con las fuerzas de seguridad y su superioridad distinguió a los escuadrones de otros actores cuya paraestatalidad provino de dependencias gubernamentales no vinculantes con el ejercicio de la violencia, lo que limitó su potencial represivo, o donde lo paraestatal fue complementario a otros fenómenos como la autodefensa civil y el narcotráfico, por lo tanto, es esta matriz compleja una de las diferencias que separan a los escuadrones de los paramilitares.¹⁴

En el peronismo de los setenta, los escuadrones adquirieron relevancia en la represión a consecuencia de la modificación de la estrategia contrainsurgente de Perón a principios de 1974. Inicialmente, el presidente planteó un esquema represivo diferencial. Por un lado, la “depuración ideológica” del peronismo, desatada a finales de 1973 para contrarrestar la “infiltración marxista” apelando a las estructuras del propio movimiento en la ejecución de la purga sobre la izquierda peronista; por otro lado, el combate a la guerrilla haciendo uso de la fuerza policial.¹⁵ El ataque al regimiento militar de

13 Waldmann, 1995, p. 26. Sobre el fenómeno de la paraestatalidad en el caso argentino véase Besoky, 2016a, pp. 4-8.

14 Para profundizar en los debates conceptuales sobre los escuadrones de la muerte véase Campbell, 2002; Kalyvas y Arjona, 2005, pp. 26-30. Respecto a la caracterización de los escuadrones en América Latina y diferencias respecto a los grupos paramilitares véase Cano, 2001; López de la Torre, 2018, pp. 161-168.

15 Merele, 2016, pp. 114-115.

Azul, realizado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 19 de enero de 1974, dio por finalizada esta fórmula inicial, una vez que los dos procesos referidos se articularon en torno a la idea de neutralizar a un mismo “enemigo interno”, encarnado en la figura del “subversivo”. La confluencia implicó un cambio drástico en la comprensión y tratamiento del problema, puesto que la “subversión”, en palabras de Perón, era una “agresión integral” que debía ser “aniquilada”.¹⁶ El cambio de enfoque originó una nueva estrategia contrainsurgente, que se profundizó en el gobierno de María Estela Martínez de Perón: la represión a colectivos disidentes cada vez más amplios mediante la violencia paraestatal y la formación extendida de los escuadrones, dispositivos que convirtieron la muerte en un hábito de su proceder.

La relevancia de los escuadrones debe ser reconocida en sus justas dimensiones, ya que fueron un fenómeno contrainsurgente de tendencia nacional, pero cuya aplicación se dio en espacios concretos mediante experiencias entre sí independientes. Estos actores se localizaron en distintos espacios geográficos y temporales, por lo que sus objetivos y comportamiento obedecieron muchas veces a proyectos y necesidades de los grupos de poder provinciales y municipales. Los escuadrones concentraron sus acciones en las ciudades y respectivas zonas metropolitanas con mayor peso político o síntomas de agreste conflicto social. Entre los más destacados están la Triple A, con su epicentro en Capital Federal, el Comando Anticomunista del Litoral en Santa Fe, el Comando Nacionalista del Norte en San Miguel de Tucumán, el Comando Libertadores de América (CLA) en Córdoba y el Comando Moralizador Pío XII en Mendoza.

Resaltar esta diversidad resulta imperioso porque el sentido común de la Triple A tiende a desdibujar la especificidad del resto de los escuadrones al ser representados como versiones locatarias de ella, por ejemplo, el CLA como la “Triple A cordobesa”; además de ayudarnos a evitar las lecturas sobre la violencia paraestatal que extrapolan las formas represivas de la Triple A al resto del territorio argentino.¹⁷ Estas consideraciones son esenciales para analizar hechos de sangre tan disímiles como el asesinato de figuras disidentes con impronta nacional por la

16 Citado en Franco, 2012a, p. 244.

17 Zapata, 2015, p. 156.

Triple A y la política de limpieza social contra prostitutas por el Comando Moralizador de Mendoza.¹⁸

En esta línea, conviene preguntarse por qué la Triple A terminó posicionada en la memoria colectiva como el artífice de la represión ilegal, considerando que no fue la única participante del proceso contrainsurgente. La respuesta está en su metodología represiva, fundamentada en la crueldad y espectacularidad de los crímenes. Su *modus operandi* se caracterizó por la inhumanidad en el trato a las víctimas, con el doble objetivo de despojarlas de toda dignidad al corporizar la figura del “enemigo subversivo” y generar el miedo social necesario para el disciplinamiento de la población. Confección de “listas negras”, atentados con coches bomba, acribillamientos a mansalva, ejecuciones colectivas (“masacres”), mutilación y abandono de cadáveres en sitios públicos fueron algunas de las prácticas que conmocionaron a la sociedad. A medida que estas aumentaron en proporción durante 1974, la violencia de la Triple A eclipsó a las de otros actores represivos en proyección mediática y se convirtió en la principal fuente de referencia de lo que un periodista mendocino denominó los “crímenes espeluznantes”.¹⁹

Estas reflexiones conducen a la necesidad de formular una periodización de la Triple A, con el propósito de revisar su derrotero represivo mientras se identifican los contextos del proceso contrainsurgente que posibilitaron su eclosión, desarrollo y extinción. Planteo tres momentos importantes. El primero es la etapa formativa (mediados de 1973 a mediados de 1974), correspondiente a la génesis de las condiciones subjetivas propicias para la represión paraestatal como a los meses donde la organización adquirió su cariz de escuadrón. El segundo es la apoteosis (julio de 1974 a julio de 1975), periodo de mayor protagonismo de la Triple A en la represión. El tercero es la desintegración (segunda mitad de 1975 a los primeros meses de 1976), periodo en el que el escuadrón desaparece y sus elementos se adecuan a la reorganización del complejo contrainsurgente orquestado por las Fuerzas Armadas previo al derrocamiento del gobierno constitucional.

Formación (mediados de 1973 a mediados de 1974)

La breve presidencia de Héctor Cámpora (25 de mayo-13 de julio de 1973) significó el único *impasse* en el proceso represivo que sacudió a la Argentina

18 Para el caso del Comando Moralizador véase Rodríguez Agüero, 2009.

19 Escobar y Velázquez, 1975, p. 98.

en la década de 1970. Su gobierno se esforzó por eliminar la represión política y establecer normas de convivencia democráticas. Las primeras medidas desmontaron el aparato represor de la dictadura de la “Revolución Argentina” (1966-1973), junto con la aprobación de una amnistía general a los presos políticos que incluyó a los miembros de las guerrillas. Además, se exigió a las fuerzas de seguridad el compromiso de actuar dentro de los márgenes de la ley. Al respecto, el ministro del Interior, Esteban Righi, dirigió un severo discurso a la Policía Federal Argentina (PFA) advirtiéndole que “(...) ninguna vejación a un ser humano quedará sin castigo. El pueblo ya no es el enemigo, sino el gran protagonista”.²⁰

Tales medidas produjeron en las fuerzas de seguridad un rechazo generalizado hacia el estado de derecho porque, en su perspectiva, generaban un clima propicio para el avance de la “subversión”. El problema se inició con la amnistía, que garantizaba la continuidad de la violencia al facilitar que los guerrilleros no arrepentidos volvieran a las armas.²¹ Las preocupaciones crecieron con la movilización social que acompañó la liberación de los presos, las tomas de edificios y el estallido del conflicto intrapartidario del peronismo, que tuvo su primera expresión importante de violencia en la “masacre” de Ezeiza el 20 de junio de 1973. La renuncia de Cámpora fue insuficiente para calmar los ánimos. En el interinato de Raúl Lastiri (julio-octubre de 1973) se reactivó la lucha armada del ERP y Montoneros, lo que terminó por hundir la imagen del estado de derecho entre policías y militares, que atestiguaron cómo el “enemigo” operaba nuevamente mientras su margen legal de actuación quedaba restringido en parámetros adversos a la lucha contrainsurgente.²²

El cúmulo de factores catalizó una subjetividad proclive a justificar los métodos ilegales para reprimir la “subversión”. La tesis era simple: si la legalidad causaba la sobrevivencia de la guerrilla y el conflicto social, entonces la ilegalidad sería capaz de contener el proceso revolucionario instalado en la sociedad. La Triple A fundamentó la violencia paraestatal sobre este juicio, concibiéndola como la solución a las restricciones que el estado de derecho impuso al accionar de las fuerzas legales en la “gue-

20 Righi, 1996, p. 69.

21 Robben, 2008, p. 157.

22 Andersen, 2002, p. 214.

rra” antisubversiva. Horacio Paino explicó que la Triple A combatió “(...) al terrorismo en su propio terreno, con sus mismas armas: con su falta de ética y moral. Lo que por sus reglamentos y leyes no pueden hacer las Fuerzas Armadas ni la Policía”.²³ En consecuencia, las condiciones subjetivas para la represión paraestatal estuvieron dadas a pocas semanas de instalado el peronismo en el poder, si bien la Triple A cruzó un azaroso sendero en su formación como escuadrón de la muerte.

La Triple A se fundó a finales de 1973 por disposición de José López Rega, titular del Ministerio de Bienestar Social (MBS). Originalmente fue una agrupación paraestatal organizada y financiada con recursos del ministerio, pero sin conexiones con las jefaturas de las fuerzas de seguridad, lo que impidió tener la sistematicidad represiva propia de un escuadrón de la muerte. La Triple A surgió en el marco de la “depuración ideológica” del peronismo, detonada por el asesinato de José Ignacio Rucci el 25 de septiembre y cuyas directivas fueron plasmadas en el Documento Reservado del 1 de octubre. La concordancia temporal se prestó para que sectores de la izquierda peronista postularan que la Triple A nació con el propósito de purgar al movimiento.²⁴ Sin embargo, la organización demostró una lógica represiva superior respecto a los sujetos a violentar, compuestos por las disidencias políticas en general y no solo por el “enemigo interno” del movimiento peronista. Basta recordar que la primera acción que reivindicó fue el atentado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen el 21 de noviembre.

En sus primeros meses de existencia, la Triple A giró en torno a la custodia del ministerio y de López Rega, un aproximado de treinta policías federales en activo o retirados. Entre ellos destacaron Juan Ramón Morales, Rodolfo Almirón, Miguel Ángel Rovira, Jorge Rivero y Edwin Duncan Farquharson. Estos individuos se conocieron en la década de 1960, cuando conformaron la “Brigada Trágica”, asociación criminal dedicada al contrabando y la extorsión en Capital Federal y el conurbano bonaerense.²⁵ Cuando López Rega asumió la cartera del MBS, contactó a Morales –conocido suyo desde los años

23 Paino, 1984, p. 42.

24 En palabras de Mario Firmenich, exlíder nacional de Montoneros, “(...) la muerte de Rucci fue tomada como el acto de justificación moral de que la Triple A saliera a masacrar a mansalva a militantes de la izquierda peronista”. (Citado en Pigna, 2008, p. 237).

25 Para mayor información véase Barbano, 2015, pp. 269-271.

cuarenta, cuando coincidieron en la custodia de la residencia de Perón– y lo designó jefe de seguridad del ministerio. Morales, a su vez, incorporó a sus compinches de antaño. La ex “Brigada Trágica” lideró los comandos de la Triple A de Bienestar Social.

La organización también contó con civiles vinculados al sector más reaccionario de la derecha peronista, quienes desempeñaban funciones administrativas en las secretarías del ministerio. El eslabón civil cumplió dos propósitos: servir de puente con los cuadros violentos de la derecha peronista para tareas de colaboración represiva y cumplir labores burocráticas vitales para el funcionamiento de la organización, desde el manejo de finanzas hasta la obtención de armamento en el extranjero, tarea que le competió a Julio Yessi.²⁶ Otro civil destacado fue Felipe Romeo, director de *El Caudillo de la Tercera Posición*. Esta revista semanal, editada entre 1973 y 1975 con recursos del ministerio, difundió el pensamiento contrarrevolucionario de la derecha peronista y es considerada el vocero público de la Triple A, debido a que el proselitismo violento de sus páginas coincidió con atentados y ejecuciones perpetradas por el escuadrón. El eslogan de la publicación, acuñado por Romeo, se convirtió en síntesis de la cosmovisión de la Triple A: “el mejor enemigo es el enemigo muerto”.

La intención de López Rega era convertir la Triple A en un escuadrón de la muerte. Para lograrlo, necesitaba la colaboración de la PFA, institución a la que Perón confió el combate frontal a la guerrilla. Los planes del ministro se vieron obstaculizados durante 1973 porque el jefe de la Federal,

26 Julio Yessi fue asesor del gabinete ministerial de López Rega y primer jefe nacional de la Juventud Peronista de la República Argentina. En mayo de 1974 ocupó la dirección del Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC), dependencia destinada a la entrega de subsidios a los planes cooperativos del país. Yessi utilizó las finanzas del INAC para contrabandear armas de guerra. El papel de Yessi en la Triple A se conoce gracias a un incidente ocurrido en febrero de 1975, cuando un cargamento de ametralladoras, proveniente de Inglaterra, fue retenido en la Aduana de Ezeiza al no cumplir con los requisitos de importación. Un grupo de ocho personas, que se identificaron como funcionarios del ministerio, irrumpieron en la aduana y se llevaron el armamento. En el marco de la causa judicial de la Triple A, Yessi reconoció haber solicitado el armamento para la seguridad del INAC, aunque argumentó desconocer su paradero después de la sustracción. [*Causa 6511 “López Rega, José y otros s/asociación ilícita”, julio de 1976, Archivo Nacional de la Memoria (ANM), Fondo Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 5, cuerpo 5, fs. 27-31.*]

el general retirado Miguel Ángel Iñíguez, no compartía su evaluación de cómo resolver el clima de conflictividad política. Iñíguez era partidario de que la represión a los “infiltrados” en el peronismo se mantuviera canalizada por los grupos civiles de la derecha peronista, evitando así que la policía interviniera de lleno en la represión ilegal.²⁷ Años después declaró que López Rega quiso “(...) influir sobre mí para que yo creara los escuadrones de la muerte (...)”, presión que finalizó por la oposición inicial de Perón.²⁸

La postura de Perón cambió en enero de 1974. Después del ataque del ERP al regimiento de Azul, el presidente decretó la reincorporación al servicio activo de los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride, designados subjefe de la PFA y jefe de la Superintendencia de Seguridad Federal respectivamente.²⁹ Las designaciones de Villar y Margaride fueron sintomáticas de la nueva estrategia represiva de Perón, conducente a aprobar la participación de la policía en la represión paraestatal. A partir de allí se produjeron una serie de reacomodos internos que culminaron con la renuncia de Iñíguez el 10 de abril de 1974. Villar lo reemplazó en la jefatura y Margaride ascendió a la subjefatura de la PFA. De acuerdo al diario *La Opinión*, la titularidad de ambos perfilaba “(...) la conclusión alcanzada por el Gobierno en el sentido de que se avecina una batalla entre las autoridades y las formaciones guerrilleras y terroristas de todo signo, aun las que se titulan peronistas”.³⁰

El diario no se equivocaba. Siendo aún subjefe de la PFA, Villar reunió cerca de cien policías y constituyó una agrupación clandestina destinada a

27 Merele, 2016, p. 120.

28 *La Nación* (24 de julio de 1987), p. 5.

29 Villar fue uno de los federales mejor capacitados en guerra contrainsurgente, cuya doctrina y métodos aprendió en Francia en los años sesenta. A inicios de la década siguiente creó el Cuerpo de Unidades Móviles de Represión, conocido popularmente como la “Brigada Antiguerillera”, fuerza especializada en antimotines urbanos que reprimió los levantamientos populares del Tucumanazo (1970) y el Viborazo (1971). Por su parte, Margaride era famoso por realizar operativos contra la vida nocturna de Capital Federal, allanando bares y hoteles para identificar y detener homosexuales, prostitutas y otros sujetos indeseables según su moral cristiana. Para una síntesis de la trayectoria de ambos personajes véase Barbano, 2015, pp. 260-264 y 271-273.

30 *La Opinión* (12 de mayo de 1974), p. 10.

ejecutar “tareas especiales” contra la izquierda: “los Centuriones”.³¹ Esta fuerza paralela estaba encabezada por los hombres de confianza de Villar, un *petit comité* conocido como la “Logia de las Caras Felices”, integrado por Gustavo Adolfo Eklund, Félix Alejandro Alais, Eduardo Fumega, Jorge Mario Veyra, Félix Farías, Jorge Muñoz, Miguel Ángel Bonifacio y Tidio Durruti.³² De acuerdo al excomisario Jorge Silvio Colotto, Eklund y Alais eran los más despiadados, habituados a torturar sus víctimas y con una óptica contrainsurgente tan inmisericorde que “(...) si los dejan solos matan medio Bs. Aires”.³³

Los cambios en la PFA definieron el curso de la Triple A. La incursión de la Federal en la represión paraestatal permitió que las aspiraciones de López Rega fueran atendidas al coincidir ambas vertientes con la estrategia contrainsurgente del gobierno. La articulación resultó en la transformación de la agrupación del ministro en un escuadrón de la muerte parapolicial, dotado con la infraestructura necesaria para sistematizar su accionar represivo. El núcleo estructural del escuadrón quedó conformado por el mando bicéfalo del MBS y la PFA, cada uno con comandos operativos autónomos. Los comandos del ministerio mantuvieron su organización original, liderados por la ex “Brigada Trágica” y con Morales como enlace con los de la Federal; cuyos comandos quedaron dirigidos por la “Logia de las Caras Felices” y constituidos por los “centuriones”. Varias dependencias de la Federal se comprometieron en apoyo logístico. Por ejemplo, el policía retirado Rodolfo Peregrino Fernández indicó que algunos perpetradores de la Triple A pertenecieron a la Brigada de Explosivos, cuerpo de bomberos especializado en el manejo y desactivación de bombas, siendo los responsables de atentados que destruyeron despachos de abogados de presos políticos, oficinas de prensa, entre otros inmuebles.³⁴

El accionar de la Triple A se vio afectado en esta etapa por las condiciones inherentes a su evolución. La escasa información disponible sobre los crí-

31 Andersen, 2002, pp. 224-225.

32 Peregrino Fernández, 1983, p. 11.

33 *El caso del ex comisario mayor Colotto, causa n° 12793 comisión de estafas reiteradas*, 5 de noviembre de 1985, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Archivo Documental, exp. APDH Represores 36, f. 1.

34 Peregrino Fernández, 1983, p. 54.

menes de la Triple A entre 1973 y mayo de 1974 –mes en que oficializaron los asensos de Villar y Margaride– muestra que el hostigamiento sobre la oposición política estuvo focalizado en las amenazas de muerte contra personajes públicos opuestos a la legislación represiva sancionada durante el gobierno de Perón.³⁵ En contraste, los hechos de sangre conocidos se reducen a dos casos concretos: el atentado con coche bomba al senador Solari Yrigoyen en noviembre de 1973 y el asesinato del sacerdote Carlos Mugica el 11 de mayo de 1974, el primero originado por la oposición del radical a la Ley de Asociaciones Profesionales y el segundo por las diferencias sostenidas con López Rega respecto a la erradicación de las villas de emergencia.

Basándome en esta información y reconociendo que los hechos de sangre debieron ser mayores en cifras, considero que la falta inicial de una infraestructura óptima para ejecutar atentados con certeza de éxito influyó en la decisión de orientar, en un primer momento, la represión por el conducto de amenazas que generaran angustia en sus destinatarios. Esta hipótesis se ve fortalecida si reparamos en que la primera acción pública de la Triple A fue un fracaso. El atentado a Solari Yrigoyen no logró su cometido mortal por la mala ubicación del artefacto explosivo en su vehículo,³⁶ dato revelador de que el siniestro fue preparado por inexpertos en la materia. A los problemas logísticos y técnicos hay que sumar el enfoque que Perón pretendió dar a la represión ilegal: una modalidad de violencia contenida donde unas cuantas bajas ejemplificadoras serían suficientes para el disciplinamiento social.³⁷ Esta apreciación parece concordar con el comportamiento de la Triple A, siendo hasta la muerte de Perón y ya constituida como escuadrón que podrá desencadenar su violencia represiva.

35 A inicios de enero de 1974, la Triple A amenazó con matar a los diputados que se opusieran a la reforma del Código Penal. A finales de mes, la organización emitió su primera “lista negra” que incluía al obispo Luis Angelelli, el líder del ERP Roberto Santucho y los dirigentes gremiales Agustín Tosco y Raimundo Ongaro.

36 Hipólito Solari Yrigoyen, comunicación personal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de julio de 2018.

37 Izaguirre, 2009, p. 97.

Apoteosis (julio de 1974 a julio de 1975)

La muerte de Perón el 1 de julio de 1974 marcó el inicio de la crisis estructural del gobierno peronista. La inexperiencia política de Martínez de Perón derivó en un progresivo vacío de poder, la pérdida del control en la economía y el incremento de la violencia política a niveles no conocidos por la sociedad argentina. Los entretelones del poder fueron conquistados por el lopezreguismo y su influencia se notó en el alejamiento de la política conciliatoria de Perón, apostando por un proyecto ultramontano que disolvió los acuerdos con las fuerzas políticas tradicionales, generó el conflicto con las históricas bases sindicales del peronismo y apostó por la exterminación total de la “subversión”.³⁸ La ausencia de la figura mediadora de Perón aceleró las dinámicas de la represión ilegal y la violencia de los escuadrones alcanzó su cenit. Consciente del nuevo escenario, la Triple A ejecutó al abogado Rodolfo Ortega Peña el 31 de julio de 1974, primer asesinato que reivindicó en un comunicado donde señaló que “(...) habiendo cesado la poderosa fuerza de contención constituida por el caudillo, la A.A.A. ha reiniciado las operaciones”.³⁹

La Triple A tuvo su apoteosis entre la muerte de Perón en julio de 1974 y la caída de López Rega en julio de 1975. Hay consenso entre los especialistas de que el fallecimiento del general significó una inflexión en el proceso represivo, que amplió el número y rango de víctimas al punto de plantearse como objetivo la eliminación física de todos aquellos que alteraran el orden en materia política, sindical y cultural.⁴⁰ La Triple A no fue ajena a este agravamiento. Durante el año de su apogeo, el escuadrón emprendió una serie de crímenes que lo consolidaron como referente del “terrorismo” de derecha.⁴¹ Ello fue posible gracias a la articulación con otros actores re-

38 Svampa, 2007, p. 421.

39 Citado en *Noticias* (Buenos Aires, 7 de agosto de 1974), p. 14.

40 Franco, 2012a, p. 112; Merele, 2016, p. 122.

41 De acuerdo a Marina Franco, la “violencia de derecha” recibió un bajo tratamiento en la prensa de circulación nacional por su difícil ubicuidad y aprehensión. Las referencias a este tipo de violencia eran, por lo general, vacías de referentes concretos y el ánimo de denunciarlas quedó circunscripto a las publicaciones militantes de los grupos de izquierda víctimas, el diario *La Opinión* y, en ocasiones, *Crónica*. Por estas razones, cuando la Triple A adquirió visibilidad con sus acciones, terminó constituyendo el

presivos y a la conexión de su accionar con las políticas coercitivas emanadas de la autoridad civil, factores que le otorgaron mayor complejidad operativa y la facultad de expandir su violencia sobre la megalópolis porteña, su conurbano y otras ciudades de la Provincia de Buenos Aires, como hacia los espacios de sociabilidad frecuentados por las disidencias (universidades, sindicatos, entre otros).

Las posibilidades de expansión de la violencia de la Triple A tuvieron dos causales: la normalización del estado de excepción y la consolidación del lopezreguismo en el gobierno nacional. A partir de la segunda mitad de 1974, la escalada de violencia definió una situación jurídica de excepción orientada al “combate” de la “subversión”. La aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en septiembre, la declaración del estado de sitio poco tiempo después y la autorización a los militares de intervenir en la represión con el Operativo Independencia en febrero de 1975 fueron disposiciones que crearon un marco contrainsurgente permisible a altos niveles de violencia y actuación criminal debido a la suspensión del estado de derecho.⁴² Escenario aparte, la cercanía de López Rega con Martínez de Perón permitió que él y sus allegados ocuparan los principales puestos del gabinete presidencial, diseñando un sistema político donde solo tuvieran cabida los verticalistas fieles a la presidenta.⁴³

La Triple A encontró terreno fértil en las condiciones descriptas. La suspensión de las garantías constitucionales articuló la excepcionalidad jurídica y la violencia institucional con el actuar de las fuerzas paraestatales, cuya criminalidad complementó el proceso represivo al potenciar el clima de miedo en la población. En tal sentido, la Triple A y los otros escuadrones se convirtieron en actores indispensables para la defensa de la seguridad interna de la nación, lo que dio luz verde al desencadenamiento de su violencia bajo el amparo de la política estatal de impunidad que encubrió sus acciones. Además, el control del lopezreguismo de varios ministerios estableció un canal para que la Triple A fuera utilizada por funcionarios del gobierno nacional y provincial para dis-

referente de la “violencia de derecha”, aunque la prensa no tematizó demasiado en la cuestión. Franco, 2012a, pp. 211-220.

42 Pontoriero, 2019, pp. 18-20; Franco, 2012b, p. 93.

43 De Riz, 2000, p. 166.

ciplinar espacios sociales considerados claves en la neutralización de la “subversión”. En consecuencia, si el escuadrón tuvo antes una actuación irregular, en adelante se tornó sistemática.

Dos ejemplos ayudan a ilustrarlo. El primero concierne a la represión en las universidades públicas. En agosto de 1974, Oscar Ivanissevich asumió el cargo de ministro de Cultura y Educación con la “misión” de aniquilar la “subversión” en el ambiente universitario. Amparado en la Ley Universitaria, el ministro sustituyó a los rectores progresistas por interventores afines a la depuración. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, el rector interventor Alberto Ottalagano despidió a cientos de trabajadores, prohibió la actividad estudiantil e implementó en los claustros un sistema de celadores integrado en parte por agentes de la PFA, quienes elaboraban informes de inteligencia sobre la situación de las facultades.⁴⁴ Esta medida facilitó a la Triple A penetrar en el mundo universitario, ubicar blancos potenciales y asesinarlos. Entre sus víctimas está José Petric, estudiante de la Facultad de Derecho que solía concurrir a asambleas estudiantiles y trabajar para el abogado Silvio Frondizi; razones suficientes para ser asesinado el 26 de septiembre de 1974.⁴⁵

El segundo alude a la represión en Lomas de Zamora. En las elecciones de 1973, la izquierda peronista obtuvo la intendencia y la mayoría del Concejo Deliberante de esta localidad del conurbano bonaerense. Los resultados detonaron el conflicto con la derecha peronista, que se agravó a partir de 1974 con la sustitución del gobernador provincial Óscar Bidegain por el burócrata sindical Victorio Calabró. En mayo de 1974, Calabró designó a Eduardo Duhalde como nuevo intendente, quien purgó la administración municipal los meses siguientes. Paralelamente, ambos personajes consintieron la presencia de la Triple A en Lomas. En aquel momento, Calabró era uno de los principales respaldos de Martínez de Perón, lo que hace entendible que el escuadrón actuara en esta localidad para liquidar los focos rojos que desestabilizaban a las autoridades “leales” al gobierno nacional. El funesto resultado fue la “Masacre de Pasco” el 21 de marzo de 1975, en la que ocho personas, la mayoría militantes de la Juventud

44 Rodríguez, 2015, p. 48.

45 “Petric Álvarez, José”, abril de 2014, ANM, Fondo Registro de Desaparecidos y Fallecidos, Carpeta Legajos 1501 al 2000, legajo 1790, f. 199.

Peronista, fueron fusiladas y sus cadáveres destruidos con explosivos. La matanza desarticuló el trabajo político de las izquierdas en beneficio de la administración de Duhalde.⁴⁶

Paralelamente, la Triple A estrechó como diversificó las articulaciones al interior del complejo contrainsurgente. En su mejor momento, el escuadrón mantuvo relaciones con la Policía de la Provincia de Buenos Aires; grupos de choque sindicales vinculados a la Unión Obrera Metalúrgica; cuadros de la derecha peronista, entre ellos el Comando de Organización y la Concentración Nacional Universitaria; la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), a través de la banda de Aníbal Gordon; y algunos militares del Ejército.⁴⁷ La intrincada red le benefició en materia de operatividad y control territorial. Sin embargo, como puntualizo más adelante, el grado de las articulaciones varió dependiendo el actor represivo y, en ciertas circunstancias, terminaron perjudicando al escuadrón.

La complejidad operativa de la Triple A coincidió con la maduración del aparato represivo paraestatal y su extensión por el territorio argentino entre 1974 y 1975, producto de la coordinación entre la PFA, las policías provinciales, organismos gubernamentales y los militares. Dentro de este marco, la Triple A procedió a “exportar” su esquema y métodos represivos a otras provincias con el fin de coadyuvar a la profesionalización de la represión paraestatal. Esta acción no debe interpretarse como prueba de la presencia del escuadrón en todo el país o que asumiera la conducción de las “bandas de derecha”. En realidad, se trató de misiones orquestadas desde la jefatura de la PFA, en las que selectos miembros del escuadrón visitaron las ciudades de mayor conflictividad social con el propósito de compartir su experiencia en el combate a la “subversión”. El testimonio de Peregrino Fernández resulta esclarecedor al respecto:

“El dicente también señala que en diversas oportunidades fue destinado, con otros efectivos de la Policía Federal, a Córdoba. (...) Es de su conocimiento que la represión de tipo ilegal en medios político-sindicales en la provincia de

46 Sobre los pormenores de la “Masacre de Pasco” véase Rodríguez Heidecker, 2011.

47 Gasparini, 2011, p. 302.

Córdoba se realizó a través de la Delegación de la Policía Federal, cuyo jefe era entonces el comisario Francisco Laguarda, actuando como jefe de Inteligencia de esa repartición el inspector [Ignacio] Arcidiácono. La delegación efectuaba sus tareas en amplia colaboración con el personal militar del Destacamento 142 de Inteligencia ‘General Iribarren’.”⁴⁸

Sin contenciones, la Triple A asesinó a decenas de personas.⁴⁹ Aunque las víctimas procedieron del heterogéneo campo de las disidencias políticas, existió predilección por aquellos individuos que fungían de articuladores sociales entre las organizaciones armadas, sus cuadros de superficie y el movimiento popular. El escuadrón buscó resquebrajar los nexos entre colectivos contestatarios y, en un plano más profundo, destruir los lazos de solidaridad social hacia las víctimas y disciplinar a la población mediante el miedo. Para lograrlo, recurrió a la espectacular crueldad de sus “crímenes espeluznantes” como a la amenaza y asesinato de personajes relevantes de la política y cultura nacional, teniendo al “septiembre negro” de 1974 como el momento más aciago al respecto.⁵⁰ Montoneros sintetizó de la siguiente manera el *modus operandi* de la Triple A:

48 Peregrino Fernández, 1983, pp. 18-19.

49 Dependiendo la fuente, las víctimas mortales de la Triple A van de 500 a 2000. El amplio margen de diferencia en las cifras se debe a que, por décadas, el escuadrón fue considerado responsable de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el periodo. Sin embargo, esta interpretación omitió el desempeño del resto de los agentes represivos del complejo contrainsurgente, como los cuadros de la derecha peronista u otros escuadrones de la muerte. El que muchos asesinatos nunca fueran reivindicados abonó para que la memoria colectiva los atribuyera a la Triple A.

50 En dicho mes, el escuadrón cobró la vida, entre otros, de los abogados Alfredo Curutchet y Silvio Frondizi, el sindicalista cordobés Atilio López y del ex subjefe de la “Bonaerense” Julio Troxler; además de conducir al exilio a los artistas Norman Briski y Nacha Guevara, el historiador de oficio Rodolfo Puiggrós y a funcionarios de la administración camporista como Esteban Righi.

“El método de la AAA no tardó en volver rutinaria la tremenda historia del militante popular arrebatado de su casa por un grupo de hombres que muestran credencial oficial y se mueven en coches de último modelo, y que aparecen luego en los baldíos de Lugano o en las piletas de Ezeiza, las manos atadas a la espalda, los ojos vendados y el cuerpo atravesado por treinta, cincuenta y hasta cien disparos de Ithaka y metrallata, con letreros infamantes a sus pies.”⁵¹

La Triple A reprimió sin contratiempos entre finales de 1974 y la primera mitad de 1975. Ni siquiera el asesinato de Villar, realizado por Montoneros el 1 de noviembre de 1974, logró detener sus acciones. En realidad, el fin de su apogeo se debió a factores exógenos. El estilo de gobernar del lopezreguismo choquó con el sindicalismo una vez que el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, implementó drásticas medidas de ajuste para paliar la crisis económica y que supusieron el primer golpe hiperinflacionario de la Argentina reciente. El Rodrigazo desató una intensa movilización social que exigió las cabezas de Rodrigo y López Rega. El estamento castrense, descontento con las ambiciones del “superministro” de influir en el Ejército, aprovechó la coyuntura y a principios de julio de 1975 filtró a *La Opinión* los pormenores de una investigación militar sobre la Triple A, que incriminaba a López Rega de ser su fundador.⁵² A partir de ahí, los acontecimientos se desbordaron. López Rega renunció al MBS el 11 de julio. Ese mismo día, el abogado Miguel Ángel Radrizzani Goñi presentó la denuncia que originó la causa judicial contra la Triple A. Para evadir la justicia, el exministro y parte de su custodia –entre ellos Almirón y Rovira– huyeron al exilio el 19 de julio.

Desintegración (segunda mitad de 1975 a principios de 1976)

Con la desaparición de López Rega, las Fuerzas Armadas empezaron a manejar los tiempos de la política mientras el gobierno constitucional se desmoronaba. En ese marco, los militares obtuvieron el control indiscutible del proceso represivo con los “decretos de aniquilamiento” firmados por el presidente provisional Ítalo Luder en octubre de 1975, los cuales les entregaban la responsabilidad de la seguridad interna a nivel nacional. Con la tutela

51 *Evita Montonera* (4 de abril de 1975), p. 45.

52 *La Opinión* (6 de julio de 1975), p. 1.

fáctica del país, los militares reorganizaron el complejo contrainsurgente, apuntando a centralizar la represión en las fuerzas de seguridad estatales con el propósito de asegurar su hegemonía. Ello significó la desarticulación de los escuadrones de la muerte, cuya autonomía y métodos se volvieron innecesarios para los objetivos castrenses.

La última etapa de la Triple A estuvo marcada por su progresivo desmonte y el reacomodo de sus miembros en el aparato represivo institucional. Sus crímenes habían sido efectivos en la instalación del miedo en la sociedad, pero también contribuyeron al “estado de caos” que posibilitó la maduración del consenso social conservador que terminaría convocando a los militares al poder en espera del restablecimiento de un orden no terrorífico y de menor violencia.⁵³ La relegitimación de las Fuerzas Armadas ocasionó que decidieran desintegrar al escuadrón, cuya existencia suponía el riesgo de verse cuestionadas socialmente al permitir la continuidad de sus acciones. Los militares calcularon que mantener la Triple A en la trama represiva era más perjudicial que benéfico a sus intereses, sellando así su suerte.

El desmantelamiento del escuadrón empezó con el núcleo de Bienestar Social. El primer paso fue desplazar a su fundador. Después de renunciar, López Rega se refugió en la residencia presidencial de Olivos, protegido por la custodia del ministerio. Durante una semana abundaron los rumores de un secuestro de la presidenta por su hombre de confianza para aferrarse en el poder, lo que impulsó a las Fuerzas Armadas a actuar con el beneplácito de algunos sectores de la clase política. El 19 de julio de 1975, cien granaderos al mando del coronel Jorge Felipe Sosa Molina rodearon la residencia y desarmaron a los custodios. Roto el “cerco” y con la presión militar, López Rega abandonó Argentina.⁵⁴

La ausencia del ministro coadyuvó a que la custodia de Bienestar Social fuera objeto de una purga. En la causa judicial de la Triple A está anexado un documento elaborado por la PFA donde enlista la nómina del personal policial que estuvo comisionado a la custodia del ministerio, incluidas las fechas de ingreso y cesantía en dicha comisión. Esta información revela

53 Carassai, 2013, pp. 180-181.

54 Larraquy, 2007, pp. 345-346.

que 28 policías fueron cesanteados el 30 de julio de 1975.⁵⁵ La cifra se aproxima al número estipulado de elementos que integraron los comandos del escuadrón, mientras el cese ocurrió después de la caída de López Rega. Aunque los datos por sí solos no confirman que todos ellos pertenecieran a la Triple A, las circunstancias que rodearon el proceso permiten barajar la hipótesis de que Margaride, sucesor de Villar en la jefatura de la PFA, decidiera desmontar este núcleo del escuadrón en el intento de congraciarse con los militares, recelosos de su cercanía con el lopezreguismo. La rama ministerial de la Tripla A quedó desarticulada para agosto de 1975.

En los meses siguientes aconteció la desintegración de la Triple A con sede en la PFA. El proceso se realizó de forma escalonada y vertical a partir de los cambios en la jefatura de la policía y la aplicación de las ordenanzas dictadas por los militares. El 13 de agosto, las Fuerzas Armadas lograron que el gobierno instruyera la destitución de Margaride, la última cabeza del escuadrón. En su lugar se designó al comisario general retirado Omar Pinto, cercano al Estado Mayor del Ejército encabezado por el teniente general Jorge Rafael Videla. La jefatura de Pinto duró hasta febrero de 1976, periodo en el que la conducción del Ejército ordenó a sus unidades de inteligencia controlar a los integrantes de los escuadrones de la Federal y de las policías provinciales.⁵⁶ La orden será ejecutada con éxito gracias a los “decretos de aniquilamiento”, que contemplaban el control de las Fuerzas Armadas sobre el resto de las fuerzas represivas estatales para coordinar la erradicación de la “subversión” a lo largo del territorio argentino.⁵⁷

El mandato castrense supuso la desarticulación de los comandos de la Triple A, mientras la mayoría de sus miembros continuaron prestando oficio profesional en la Federal y la Bonaerense. La desintegración concluyó semanas previas al golpe de Estado, con la llegada a la jefatura de la PFA del general Albano Harguindeguy. Apenas asumió el cargo, finiquitó los restos de la Triple A y reintegró a cuatro mil agentes que servían de custodias

55 *Causa 6511 “López Rega, José y otros s/asociación ilícita”,* marzo de 1976, ANM, Fondo Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 5, cuerpo 4, fs. 135-146.

56 Andersen, 2002, p. 252.

57 Para un análisis de los “decretos de aniquilamiento” como punto de partida del terror de Estado véase Scatizza, 2016, pp. 40-43.

de los dirigentes sindicales. Estas disposiciones apuntaron a finalizar el “patoterismo” y “matonaje” de los grupos paraestatales como a neutralizar cualquier interferencia de la burocracia sindical en impedimento del golpe.⁵⁸

La desintegración de la Triple A no significó el fin de la participación de sus elementos en la represión ilegal. El Ejército los involucró en operativos clandestinos que fueron coordinados por los cuerpos y servicios de inteligencia del arma en la Provincia de Buenos Aires. Varios testimonios señalan que el capitán Mohamed Alí Seineldín era un nexo importante entre el Ejército y la extinta Triple A, reuniendo a varios policías en la guarnición de Campo de Mayo para identificar blancos a reprimir.⁵⁹ El Batallón de Inteligencia 601 también recurrió a esta mano de obra. Orestes Vaello, suboficial del batallón, declaró a la CONADEP que, a finales de 1975, la superioridad le encargó una serie de crímenes políticos, que perpetró con exintegrantes de la Triple A y la CNU, entre ellos el asesinato del cura villero José Tedeschi en febrero de 1976.⁶⁰

La metodología represiva sufrió cambios drásticos con los militares al mando del proceso represivo, apostando por el aniquilamiento secreto y sistemático de las disidencias. Los especialistas han establecido una serie de motivos que explican la adopción de tal cambio, entre ellos las prácticas ilegales que avalaba la doctrina contrainsurgente, el cuestionamiento a la liberación de los presos políticos por Cámpora y la conclusión de que los medios legales serían insuficientes para evitar el retorno de la “subversión” en caso de una eventual toma del poder.⁶¹ A ello debe sumarse el desprestigio gubernamental causado por la espectacularidad de los crímenes de los escuadrones, que fueron generando un creciente repudio social. El cúmulo de factores derivó en que militares y demás fuerzas de seguridad decidieran utilizar la desaparición forzada como táctica central del aniquilamiento clandestino. Dado que la transición coincide con los reacomodos del complejo contrainsurgente, es difícil establecer si la Triple A normalizó tal práctica en su repertorio antes de extinguirse.

58 Vázquez, 1985, p. 22

59 Peregrino Fernández, 1983, p. 17; Andersen, 2002, p. 252.

60 “Vaello, Orestes Estanislao”, junio de 1984, ANM, Fondo CONADEP, Carpeta Denunciantes, legajo 3675.

61 Pontoriero, 2016, p. 32.

Las articulaciones represivas de la Triple A

En su apoteosis, la Triple A se relacionó con varios actores represivos del entramado contrainsurgente. En primera instancia, la articulación fue producto de la convergencia de los perpetradores en una empresa común: la destrucción de las disidencias opositoras al gobierno peronista. El análisis resulta más complejo cuando se trata de desentrañar los motivos o intereses particulares que orientaron los acercamientos, en los que incidieron factores como el contexto represivo general, las circunstancias concretas de cada actor, la afinidad político-ideológica, el perfil identitario de los sujetos reprimidos o el pragmatismo de obtener algún rédito de la contraparte en la relación. Sin duda, el tema de las articulaciones represivas constituye una veta cuya exploración está en pleno desarrollo, como lo muestra el reciente trabajo de Juan Luis Besoky sobre la CNU y cómo el cambio de su dirigencia a mediados de 1974 catalizó su conversión de una violenta organización civil de derecha peronista a un escuadrón paraestatal que actuó en coordinación con la Triple A sin perder su autonomía, aunque en desmedro de su trabajo político en el ambiente universitario de La Plata.⁶²

Por ahora, me limitaré a proponer un esquema de análisis de la cuestión a partir del tipo de articulación establecida por la Triple A, debido a que se desarrollaron en niveles diferenciados dependiendo el actor contrainsurgente. Conjeturo tres modelos de articulación. El primero es la *compenetración*, que corresponde a los casos donde la comunión de intereses y respaldos permitió una relación casi orgánica entre las partes. El segundo es la *complementariedad*, basado en la coincidencia de objetivos entre actores con agendas propias y cuya articulación supuso resultados positivos para las partes que, en lo demás, mantuvieron su autonomía. El tercero es la *divergencia*, donde los intentos de articulación produjeron conflictos de interés con saldos negativos para una de las partes. Considero que estos modelos refutan el sentido común sobre la Triple A y su papel de directriz en la represión ilegal, ubicándola más bien como un engranaje de la maquinaria represiva, cuyas partes no siempre tuvieron una marcha armónica.

Ejemplo de compenetración fue la articulación entre la Triple A y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la fuerza policial con el prontuario crimi-

62 Besoky, 2020, pp. 156-161.

nal más abultado de Argentina.⁶³ El contacto fue obra de Alberto Villar. De acuerdo al exintegrante del escuadrón Jorge Muñoz, el jefe de la PFA se reunió con su homólogo de la Bonaerense, el inspector general Enrique Everando Silva, resolviendo a fines de julio de 1974 aunar y coordinar esfuerzos para combatir la “subversión”.⁶⁴ Aunque no hay detalles concretos del acuerdo, después de esa fecha el escuadrón actuó regularmente fuera de Capital Federal, concretamente en el conurbano bonaerense, La Plata y con ramificaciones en Mar del Plata y Bahía Blanca. La ampliación territorial fue solo uno de los beneficios que el escuadrón obtuvo con la articulación, al que se deben sumar el respaldo de la policía provincial en tareas de inteligencia como en la ejecución de operativos en espacios ajenos a la jurisdicción de la PFA. La compenetración llegó al punto que efectivos de la Bonaerense se integraron a los comandos asesinos del escuadrón. Quizás el caso más conocido es el oficial Juan Fiorillo, participe en el asesinato del periodista Leopoldo Barraza y su pareja Carlos Laham, el 13 de octubre de 1974.⁶⁵

La complementariedad fue un rasgo característico de la articulación que tuvieron las organizaciones más recalcitrantes de la derecha peronista y la Triple A. La agenda política de las primeras estuvo regida por la dispu-

63 Según cifras recogidas por el diario *Noticias*, la policía bonaerense mató a 302 personas en 1973, mientras que el total de muertos por acción policial en Argentina fue de 422. Es decir, la Bonaerense fue responsable del 72% de las muertes, superando 4 a 1 a las efectuadas por la PFA y el resto de las policías provinciales. Para mayor información véase *Noticias* (31 de diciembre de 1973), p. 17.

64 Muñoz, 1984, p. 74.

65 El asesinato de Barraza, además de la tonalidad política por tratarse de un periodista que denunció la represión, suscribió a un ajuste de cuentas personal por parte de Fiorillo. El expediente represivo de este personaje incluye la desaparición forzada del militante peronista Felipe Vallese en 1962. El crimen fue investigado por Barraza, quien identificó a Fiorillo, en aquel entonces jefe de la Brigada de Servicios Externos de la Unidad Regional de San Martín, como el individuo que ordenó la tortura y desaparición de Vallese. La investigación fue publicada en la revista *Compañero* en 1963, siendo decisiva para que Fiorillo y otros policías fueran juzgados y condenados en 1971. Fiorillo salió de prisión en 1974, fue reincorporado a la Bonaerense y pasó a integrar las filas de la Triple A. En consecuencia, la venganza aparece como un móvil latente de la participación de Fiorillo en este crimen en particular.

ta y control del movimiento peronista frente al peronismo revolucionario, “enemigo interno” estigmatizado bajo la figura del “infiltrado” marxista para justificar su “depuración”. En contraste, el escuadrón engendró terror sobre una oposición que rebasaba las fronteras político-partidarias del peronismo, por ejemplo, intelectuales marxistas, curas villeros y artistas. Estos agentes y sus respectivas agendas convergieron gracias a la coincidencia de imaginarios, puesto que profesaban un nacional-justicialismo contrarrevolucionario, como por la existencia de un enemigo común que disputaba la conducción de los Perón.⁶⁶

La relación de la Triple A con el Comando de Organización ilustra la articulación de complementariedad. El CdeO fue de las organizaciones más longevas de la derecha peronista, nacida al calor de la resistencia a principios de los años sesenta. Tras una serie de fracturas internas, el liderazgo nacional recayó en Alberto Brito Lima, quien se alineó a López Rega en 1973 con el propósito de expulsar a Cámpora y los “infiltrados” de los espacios de poder conquistados, siendo el CdeO uno de los grupos perpetradores de la “masacre” de Ezeiza. La alianza táctica con el lopezreguismo significó la oportunidad de aumentar su capital económico con recursos del MBS, mientras sus cuadros comenzaron a relacionarse con la PFA y las policías provinciales.⁶⁷ Villar terminó fortaleciendo el vínculo para que la agrupación, específicamente los cuadros al mando de Brito Lima en Capital Federal y el conurbano bonaerense, colaboraran en la represión paraestatal de la Triple A. El propio Brito Lima confesó en 2012 que “(...) yo era muy amigo de Villar (...) [él] nos dio 200 ametralladoras Halcón”.⁶⁸

El entronque generó ventajas estratégicas mutuas. Para el CdeO, la garantía de recibir insumos e impunidad estatal para sus acciones represivas. Para la Triple A, la obtención de información sobre disidentes de carácter local y hasta barrial. Por ejemplo, el 22 de agosto de 1974 el escuadrón ejecutó a los militantes de izquierda peronista Eduardo Beckerman, Pablo Van Lierde e hirió de gravedad a Carlos Baglietto en la “masacre del basural de Quilmes”. Según Baglietto, los perpetradores los torturaron para que identificaran a

66 Sobre la cultura política de la derecha peronista en el periodo de estudio véase Besoky, 2016b, pp. 239-263.

67 Zicolillo, 2013, p. 170.

68 Citado en Anzaldi, 2016, p. 205.

los integrantes de Montoneros en Quilmes. Las víctimas dieron los nombres de sus adversarios políticos, ante lo cual arreció la tortura porque el comando conocía la planilla de la derecha peronista local, señalándoles incluso que los nombres pertenecían a gente del CdeO.⁶⁹ En tal sentido, el contubernio facilitó la identificación de individuos a reprimir para desarticular las unidades básicas del peronismo revolucionario, agregando que los militantes del CdeO posiblemente indicaron dónde localizar a los jóvenes posteriormente acribillados.

Quizás el mejor ejemplo de una articulación divergente fue aquella que la Triple A sostuvo con el Ejército. El escarnio social que los militares experimentaron con el retorno de la democracia en 1973 causó que la mayoría de las corrientes internas en el Ejército asumieran un consenso favorable hacia el profesionalismo prescindente, fórmula que planteó el fin de la injerencia castrense en el poder civil siempre y cuando la nación, desde su punto de vista, no fuera víctima de una situación de amenaza a su orden interno protagonizada por la “subversión”.⁷⁰ Después de la muerte de Perón y con las acciones guerrilleras en aumento, la prescindencia supuso una agenda cada vez más crítica al gobierno constitucional, teniendo como eje la exigencia de mayor participación en las tareas de represión y seguridad interna. Los principales exponentes del profesionalismo prescindente eran el teniente general Leandro Anaya, comandante en jefe del Ejército, y sus asesores de confianza, los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola.

La eventual participación militar en la contrainsurgencia hizo que el lopezreguismo intentara ejercer su influencia en el Ejército. López Rega y el ministro de Defensa Adolfo Savino se aproximaron a militares de alto rango, pero marginados de los principales cargos intrafuerza, como a oficiales de rango medio para constituir una interna que defendiera la tesis del profesionalismo oficialista: la compenetración del arma a los intereses del gobierno peronista, en este caso presidido por el lopezreguismo.⁷¹ A pesar

69 *La Causa Peronista* (27 de agosto de 1974), p. 5.

70 Fraga, 1988, p. 69.

71 De acuerdo a Rosendo Fraga, al interior de la línea oficialista existieron posiciones diferenciadas respecto a qué tan comprometida debía ser su relación con el peronismo gobernante y cómo debía de expresarse, siendo una de las facciones internas la que

de su condición marginal dentro del arma, la interna fracturó el consenso sobre la prescindencia a la vez de constituirse en el puente entre el Ejército y la Triple A. Entre quienes se allegaron al lopezreguismo para salvar sus carreras estuvieron los generales Alberto Numa Laplane, Guillermo Ezcurra y el mayor Roberto Bauzá.

La escasa información disponible sobre el papel de los militares en el escuadrón apunta a que colaboraron en tareas de inteligencia y reclutamiento. Respecto al primer punto, Bauzá fue vinculado a la Triple A en un informe de la Secretaría General del Ejército de julio de 1975, existiendo también la denuncia de que elaboró “listas negras” de personas a liquidar siendo jefe de Seguridad e Inteligencia de la Casa de Gobierno;⁷² si bien otras versiones presumen que era un doble agente de Anaya y que colaboró con López Rega para obtener información del escuadrón que posteriormente comunicaba a la superioridad.⁷³ Que la bibliografía especializada recoja versiones tan contrastantes del desempeño de Bauzá es indicativo de la dificultad de identificar los alcances de la participación militar en la Triple A, problema que, en primera instancia, reside en la falta de fuentes documentales y testimoniales causada por el secreto profesional castrense que impera alrededor del tema.

Más grave fue el asunto del reclutamiento. Los militares alineados al lopezreguismo buscaron cooptar a soldados rasos para nutrir de efectivos al escuadrón, aprovechando el malestar que generaban las muertes de los compañeros “caídos” en combate o por atentados orquestados por la guerrilla. Varios especialistas han destacado la importancia de estas muertes y su ritualidad conmemorativa en la construcción de estructuras del sentimiento enfocadas a fortalecer valores como la abnegación y el sacrificio en las filas militares, pero que también favorecieron a la circulación del odio y deseo de venganza contra la “subversión”, orientando a soldados y oficiales a asumir el recurso de la violencia como una necesidad inevitable.⁷⁴ Los lopezreguistas y militares vinculados a la Triple A intentaron explotar esta disposición a la revancha, presentando al escuadrón como la opción donde los soldados

buscó consolidar un poder propio allegándose al ministro de Bienestar Social. Para mayor información véase *ibídem*, pp.137-139.

72 Larraquy, 2007, pp. 502-503; Fraga, 1988, p. 205.

73 Seoane y Muleiro, 2001, p. 29.

74 Salvi, 2012, pp. 120-125; Garaño, 2012, pp. 213-244; Garaño y Pontoriero, 2018.

podrían desahogar su frustración y rabia incursionando en la represión paraestatal. En palabras de Videla:

“En un momento dado, a fines de 1974, López Rega con el ministro de Defensa, Adolfo Savino, se hacen presentes en forma sorpresiva en el Comando en Jefe del Ejército; era un día al atardecer y Anaya estaba con Viola y conmigo. Se anuncian, Anaya los recibe, y ellos dicen que han venido para ‘ofrecer trabajo para que los muchachitos se sacaran el gusto’. Ésas son las palabras que utilizan. Era la época en la que morían oficiales, no por enfrentamientos sino por atentados individuales y por ataques contra unidades militares, y la cosa se estaba poniendo pesada. En los velatorios, oficiales superiores escuchaban comentarios críticos sobre por qué los muertos eran todos jóvenes, por qué nunca les tocaba a los coroneles y generales. Éstos habían pescado algo de ese desagrado y fueron a ofrecer “trabajo” para esos oficiales jóvenes; concretamente, a ofrecer que operaran con la Triple A. Era un ofrecimiento en términos generales, pero perfectamente entendible para todos. Anaya nos miró y de entrada fue terminante en la negativa.”⁷⁵

Estos hechos explican la divergencia en la articulación del Ejército y la Triple A. Aunque coincidentes en la empresa de aniquilamiento de la “subversión”, la conducción del Ejército interpretó la relación de algunos militares con el escuadrón como una flagrante intromisión del lopezreguismo en los asuntos internos del arma, con el riesgo potencial de romper la cadena de mando castrense justo cuando el Poder Ejecutivo decidió incorporar al Ejército a la esfera de la represión y seguridad interna con la firma del Decreto 621/75 que dio inicio al Operativo Independencia en Tucumán en febrero de 1975.⁷⁶ Por consiguiente, la Triple A se convirtió en una amenaza más que un aliado porque representaba un factor desestabilizador de la

⁷⁵ Citado en Reato, 2012, p. 167.

⁷⁶ Pontoriero, 2017, pp. 58-59.

articulación represiva del arma con la autoridad de Martínez de Perón, forjada al margen de las ambiciones del “superministro” y allegados de controlar las áreas estratégicas del Estado.

Lo cierto es que, pese a la divergencia, el Ejército dejó actuar impunemente a la Triple A, incluso sobre su propio personal como lo testifican el asesinato del coronel Martín Rico y la desaparición forzada del coronel retirado Óscar Montiel a fines de marzo de 1975. Los dos eran oficiales comprometidos con el estado de derecho, postura que los llevó a investigar las relaciones del Ejército con el escuadrón sin el consentimiento de la superioridad. De lo poco que se sabe de la investigación, puesto que desapareció cuando se perpetraron los crímenes, es que los militares habían concluido que la SIDE y el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) colaboraban con la Triple A. El titular del SIE era el general Otto Paladino. De la información presente en la causa judicial de la Triple A se desprende que el grupo de Aníbal Gordon fue responsable de perpetrar los crímenes por orden del jefe de la SIDE, el contralmirante Aldo Peyronel; que el comando ejecutor tuvo la ayuda de elementos de este aparato estatal, destacando el vicecomodoro Rodolfo Schillizzi Moreno; y que a Montiel lo mataron en un garaje propiedad de la SIDE en Capital Federal, para después quemar el cadáver en la ciudad bonaerense de Chascomús.⁷⁷ La conducción del Ejército encubrió a los perpetradores al juzgar inconveniente que saliera a la luz una investigación que responsabilizaba al arma de coparticipar en la represión paraestatal.⁷⁸

En abril de 1975, Anaya encargó una investigación oficial sobre la Triple A al coronel Sosa Molina, con la finalidad de utilizarla como herramienta de presión contra López Rega. La pesquisa fue entregada a Savino, quien respondió con la destitución de Anaya y la designación de Numa Laplane en la comandancia del Ejército. La medida detonó el conflicto, puesto que el golpe unió a las Fuerzas Armadas contra el lopezreguismo. El almirante Eduardo Emilio Massera, jefe de la Armada, acordó con Videla y Viola filtrar parte de la investigación de Sosa Molina a *La Opinión* en plena crisis social abierta por el Rodrigazo. La intención era que la publicación cargara sobre el ministro toda la responsabilidad en relación a la Triple A y, con ello, lograr su

77 Causa 6511 “López Rega, José y otros s/asociación ilícita”, octubre de 1983, ANM, Fondo Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 5, cuerpos 12 y 13.

78 Martín Rico (hijo), comunicación personal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de mayo de 2018.

renuncia para que los militares pudieran asumir el liderazgo indiscutible de la represión.⁷⁹ La jugada aceleró la caída de López Rega en julio de 1975 y, un mes después, la de Laplane y el resto de los militares cercanos al lopezreguismo con la asunción de Videla como nuevo comandante en jefe. Iniciaba así la desintegración del actor paraestatal que a los militares causó tantos problemas, pese a su notable y funesta contribución en la “guerra” contra la “subversión”.

Reflexiones finales

En la última década asistimos a la producción de nuevas investigaciones sobre la represión en el periodo constitucional del peronismo de los años setenta, las cuales han brindado nuevas interpretaciones acerca de las dinámicas que adoptó el proceso represivo, ya sea en perspectiva de escalas o recuperando el desempeño de los múltiples actores que protagonizaron el hostigamiento y la aniquilación de las disidencias político-sociales. Este contexto abrió la puerta para que la Triple A fuera objeto de nuevas aproximaciones e interrogantes, que asumen un posicionamiento crítico respecto al sentido común construido alrededor de ella desde la década de 1980 y que tendió a sobredimensionar a la par de minimizar su actuación. Sin pretender haber agotado la exploración del tema, considero que el acercamiento propuesto en estas páginas ayuda a ilustrar la compleja trama de un escuadrón de la muerte paraestatal cuya agenda represiva no estuvo acotada únicamente a los designios de López Rega, como tampoco su potencial represivo estuvo dado desde sus orígenes ni mucho menos puede confundirse como la coordinadora del complejo contrainsurgente del peronismo gobernante.

La trayectoria de la Triple A revela el notorio condicionamiento que en su evolución tuvieron las modificaciones en las estrategias contrainsurgentes adoptadas por el gobierno nacional, junto a coyunturas que cambiaron el rumbo de su trayectoria represiva. La Triple A nació como una agrupación paraestatal al servicio de López Rega y dependiente de los recursos de Bienestar Social, asumiendo desde el inicio la tarea de aniquilar a quienes se opusieran a las políticas de Perón, tal cual lo ejemplificó el atentado a Solari Yrigoyen. Sin embargo, no fue sino hasta el cambio estratégico en la

79 Uriarte, 2011, p. 116.

represión a la “subversión”, tras el fallido copamiento del cuartel de Azul por el ERP y el involucramiento de la PFA de Villar en la represión paraestatal, que la Triple A pudo constituirse en un escuadrón de la muerte organizado y con la infraestructura necesaria para engendrar muerte y miedo en la sociedad.

La apoteosis de la Triple A se desarrolló después del fallecimiento de Perón y en correlación a la creciente descomposición del clima de gobernabilidad en el mandato de Martínez de Perón. Gran parte del potencial represivo que adquirió en su cenit se debió a su instrumentalización por funcionarios y autoridades civiles del gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires como por la amplia red de articulaciones cultivada con otros actores represivos. Sin embargo, pese a la funcionalidad de sus crímenes en la progresiva instalación del miedo en la sociedad, el escuadrón no sobrevivió a la reorganización del complejo contrainsurgente conducido por las Fuerzas Armadas. Para el 24 de marzo de 1976, la Triple A ya había sido decapitada, sus comandos desintegrados y sus integrantes puestos en circulación según los requerimientos de la última dictadura militar.

Detrás de las articulaciones compenetradas, complementarias y divergentes existieron factores de interés que son necesarios de desentrañar para comprender motivaciones y fines perseguidos entre las partes de la relación. Para la Triple A, resulta claro que buscó fortalecer su capacidad operativa, de inteligencia y extender su margen territorial de actuación. Para sus contrapartes, los intereses fueron más variados. En los casos analizados se observa que la policía bonaerense armonizó con la federal en encausar la “guerra” contra la “subversión” a través de la paraestatalidad, consecuencia del repudio de las fuerzas de seguridad hacia el estado de derecho. La estrategia del CdeO apuntó a preservar su autonomía mientras se beneficiaba de los insumos proporcionados por el MBS y la PFA, a la par de respaldar asesinatos perpetrados por el escuadrón que le eran útiles en la pugna de poder en el movimiento peronista. Por último, los militares del Ejército afines al lopezreguismo esperaron salir de su marginación y ascender escalafones al asociarse con la Triple A. Sin embargo, la reacción de la comandancia del arma, en colusión con las otras Fuerzas Armadas, terminó estropeando sus aspiraciones y aceleró la caída de López Rega y la desintegración del escuadrón.

Fecha de recepción: 11 de junio de 2020

Fecha de aprobación: 28 de junio de 2020

Archivos

Archivo Nacional de la Memoria, ciudad de Buenos Aires.

Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, Buenos Aires.

Bibliografía

Andersen, M. E. (2002). *La policía. Pasado, presente y propuestas para el futuro*. Buenos Aires: Sudamericana.

Anzaldi, P. A. (2016). *Los años 70 a fondo. Guerrilleros, militares y familiares. Reportajes inéditos a los protagonistas de la Argentina violenta*. Buenos Aires: Sb Editorial.

Barbano, R. (2015). *Sangre azul. Historia criminal de la Policía Federal Argentina*. Buenos Aires: Planeta.

Blaustein, E. (1984). Triple A: informe desde la antesala del proceso. *El Porteño*, 3(27), 5-7.

Besoky, J. L. (2016a). Violencia paraestatal y organizaciones de derecha. Aportes para repensar el entramado represivo en la Argentina, 1970-1976. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Recuperado de <https://journals.openedition.org/nuevomundo/68974>

Besoky, J. L. (2016b). *La derecha peronista: Prácticas políticas y representaciones (1943-1976)* (tesis de doctorado inédita). Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Besoky, J. L. (2020). Violencia paraestatal en el Gran La Plata (1973-1976): el caso de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). En D. Lvovich (comp.), *Políticas públicas, tradiciones políticas y sociabilidades entre 1960 y 1980. Desafíos en el abordaje del pasado reciente en la Argentina 1* (pp. 143-170). Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Campbell, B. B. (2002). Death Squads: Definition, Problems, and Historical Context. En B. B. Campbell, y A. D. Brenner (eds.), *Death Squads in Global Perspective. Murder with Deniability* (pp. 1-26). New York: Palgrave Macmillian.

Cano, I. (2001). Policía, paramilitares y escuadrones de la muerte en América Latina. En K. Bodemer *et al.* (eds.), *Violencia y regulación de conflictos en América Latina* (pp. 219-235). Caracas: Nueva Sociedad.

Carassai, S. (2013). *Los años setenta de la gente común. La naturalización de la violencia*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Cavarozzi, M. (2002). *Autoritarismo y democracia*. Buenos Aires: Eudeba.

Crenzel, E. (2008). *La historia política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en la Argentina*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

De Riz, L. (2000). *La política en suspenso: 1966-1976*. Buenos Aires: Paidós.

Escobar, J. y Velázquez, S. (1975). *Examen de la violencia argentina*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Feinmann, J. P. (1987). *López Rega. La cara oscura de Perón*. Buenos Aires: Legasa.

Fraga, R. (1988). *Ejército: del escarnio al poder (1973-1976)*. Buenos Aires: Planeta.

Franco, M. (2012a). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Franco, M. (2012b). Rompecabezas para armar: la seguridad interior como política de Estado en la historia argentina reciente (1958-1976). *Contemporánea: historia y problemas del siglo XX*, 3(3), 77-95.

Franco, M. (2016). La represión estatal en la historia argentina reciente: problemas, hipótesis y algunas respuestas tentativas. En G. Águila, S. Garaño y P. Scatizza (coords.), *Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado* (pp. 17-45). La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Franco Restrepo, V. L. (2002). El mercenarismo corporativo y la sociedad contrainsurgente. *Estudios Políticos*, 21, 55-82.

Garaño, S. (2012). *Entre el cuartel y el monte. Soldados, militantes y militares durante el Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977)* (tesis de doctorado inédita). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Garaño, S. y Pontoriero, E. (2018). “Esta sangre es inmensamente fecunda”. Un análisis de los funerales de los militares “caídos” en la llamada “lucha contra la subversión” (1973-1974). *Quinto Sol*, 22(2), 1-23.

Gasparini, J. (2011). *López Rega. La fuga del Brujo*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

Glasman, G. (2010). *La siniestra Triple A. Antesala del Infierno en la Argentina*. Buenos Aires: L.D. Books.

González Janzen, I. (1986). *La Triple A*. Buenos Aires: Editorial Contrapunto.

Izaguirre, I. (2009). El mapa social del genocidio. En I. Izaguirre (comp.), *Lucha de clases, guerra civil y genocidio en Argentina 1973-1983. Antecedentes, desarrollo, complicidades* (pp. 73-118). Buenos Aires: Eudeba.

Kalyvas, S. y Arjona, A. (2005). Paramilitarismo: una perspectiva teórica. En A. Rangel (ed.), *El poder paramilitar* (pp. 25-45). Bogotá: Planeta.

Larraquy, M. (2007). *López Rega. El peronismo y la Triple A*. Buenos Aires: Punto de Lectura.

López de la Torre, C. F. (2018). La Nueva Organización Anticomunista (NOA). Historia represiva de un escuadrón de la muerte paraestatal. *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe*, 15(1), pp. 159-187.

Merele, H. J. (2016). El proceso represivo en los años setenta constitucionales. De la “depuración” interna del peronismo al accionar de las organizaciones paraestatales. En G. Águila, S. Garaño y P. Scatizza (coords.), *Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina. Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado* (pp. 103-128). La Plata: Universidad Nacional de La Plata.

Merele, H. J. (2017). *La “depuración” ideológica del peronismo en General Sarmiento (1973-1974). Una aproximación al proceso represivo durante los años setenta constitucionales a partir del caso de Antonio Tito Deleroni*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata-Los Polvori- nes: Universidad Nacional de General Sarmiento-Misiones: Universidad Nacional de Misiones.

Muñoz, J. (1984). *¡Seguidme! Vida de Alberto Villar*. Mar del Plata: Ediciones Informar.

Paino, H. S. (1984). *Historia de la Triple A*. Montevideo: Editorial Platense.

Peregrino Fernández, R. (1983). *Autocrítica policial*. Buenos Aires: El Cid Editor.

Pontoriero, E. (2016). En torno a los orígenes del terror de Estado en la Argentina de la década de los setenta: cuándo, cómo y por qué los militares decidieron el exterminio clandestino. *Papeles de Trabajo. La revista electrónica del IDAES*, 10(17), 30-50.

Pontoriero, E. (2017). Excepcionalidad jurídica y contrainsurgencia: claves para pensar la racionalidad militar en los inicios del terror de Estado (1973-1976). *Páginas. Revista digital de la Escuela de Historia*, 9(19), 53-74.

Pontoriero, E. (2019). Pensar el estado de excepción desde la historia reciente argentina: claves teóricas e históricas de un objeto complejo. *Revista Conflicto Social*, 12(21), 6-27.

Pigna, F. (2008). *Lo pasado pensado. Entrevistas con la historia argentina (1955-1983)*. Buenos Aires: Planeta.

Ranalletti, M. y Pontoriero, E. (2010, junio). *La normativa en materia de defensa y seguridad y la criminalización de las disidencias (1955-1976)*. Ponencia presentada en las V Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente, Buenos Aires, Argentina.

Reato, C. (2012). *Disposición Final. La confesión de Videla sobre los desaparecidos*. Buenos Aires: Sudamericana.

Righi, E. (1996). Discurso del Ministro del Interior, Dr. Esteban Righi, a la Policía Federal, 5 de junio de 1973. En R. Baschetti (comp.), *De Cámpora a la ruptura* (pp. 65-69). La Plata: De la Campana.

Robben, A. C. G. M. (2008). *Pegar donde más duele. Violencia política y trauma social en Argentina*. Barcelona: Anthropos Editorial.

Rodríguez, L. G. (2015). *Universidad, peronismo y dictadura (1973-1976)*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Rodríguez Agüero, L. (2009). Mujeres en situación de prostitución como blanco del accionar represivo: el caso del Comando Moralizador Pío XII,

Mendoza, 1974-1976. En A. Andújar *et al.* (comps.), *De minifaldas, militancias y revoluciones. Exploraciones sobre los 70 en la Argentina* (pp. 109-126). Buenos Aires: Luxemburg.

Rodríguez Agüero, L. (2013). *Ciclos de protestas, experiencias organizativas y represión paraestatal. Mendoza, 1972-1976* (tesis de doctorado inédita). Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Rodríguez Heidecker, P. (2011). *Masacre de Pasco. 21 de marzo de 1975*. S/L: Easygraph.

Salvi, V. (2012). *De vencedores a víctimas. Memorias militares sobre el pasado reciente en la Argentina*. Buenos Aires: Biblos.

Scatizza, P. (2016). *Un Comahue violento. Dictadura, represión y juicios en la Norpatagonia argentina*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Seoane, M. y Muleiro, V. (2001). *El dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla*. Buenos Aires: Sudamericana.

Svampa, M. (2007). El populismo imposible y sus actores, 1973-1976. En D. James (dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)* (pp. 381-438). Buenos Aires: Sudamericana.

Uriarte, C. (2011). *Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera*. Buenos Aires: Planeta.

Vázquez, E. (1985). *La última. Origen, apogeo y caída de la dictadura militar*. Buenos Aires: Eudeba.

Waldmann, P. (1995). Represión estatal y paraestatal en Latinoamérica. *América Latina Hoy*, 10, 21-28.

Zapata, A. B. (2014). *Andamios de experiencias. Conflictividad obrera, vigilancia y represión en Argentina. Bahía Blanca, 1966-1976* (tesis de doctorado inédita). Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Zapata, A. B. (2015). Pensar la escalada de violencia y la violencia en escalas. Entramados de la "lucha antisubversiva" pre-dictatorial. Bahía Blanca, 1974/1976. *Avances del Cesor*, 12(12), 141-156.

Zicolillo, J. (2013). *La era de los culatas. La derecha peronista y el patoterismo sindical*. Buenos Aires: Javier Vergara Editor.